



“El derecho deportivo en el Perú, particularmente en el fútbol, ha ganado relevancia como fenómeno económico, social y cultural”

EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Actualidad de la energía solar fotovoltaica en el Perú

Latest news on photovoltaic solar energy in Peru

Precedente vinculante establece reglas procesales para el proceso de cumplimiento

Binding precedent establishes procedural rules for the compliance process

El derecho deportivo en el Perú: una mirada al fútbol

Sports Law in Peru: A Glance at Football (soccer)

La responsabilidad del empleador: La acción preventiva en la seguridad y salud en el trabajo

Employer liability: Preventive Action related to Safety and Health at Work



Actualidad de la energía solar fotovoltaica en el Perú

5 RENATO VÁSQUEZ NINA
Asociado, experto en derecho de la Electricidad



El derecho deportivo en el Perú: una mirada al fútbol

8 ALONSO VERA ALARCÓN
Socio senior, experto en derecho corporativo



COMENTARIO LABORAL

La responsabilidad del empleador: La acción preventiva en la seguridad y salud en el trabajo

11 AUGUSTO ESPINOZA PASQUEL
Asociado junior, experto en derecho Laboral y Seguridad Social



Precedente vinculante establece reglas procesales para el proceso de cumplimiento

13 MATEO SALINAS FETZER
Asociado senior, experto en Litigios y Controversias



Los riesgos adicionales de comprar una empresa en el Perú

16 ALEJANDRA SANTISTEVAN DE LAS CASAS
Asociada senior, experta en Derecho Corporativo



Del Tik Tok al registro: ¿Frases virales distintivas como marcas?

19 JULIANA DEL ÁGUILA IÑAPI
Asociada, experta en Propiedad Intelectual



DESDE EL CONGRESO

- * Prohibir las llamadas de recordatorio de pago antes del vencimiento de deuda.
- * Establecer tratamiento progresivo del pago del Impuesto a la Renta para empresas nuevas o que se formalicen.

24



EL EXPERTO

El directorio como hito de madurez empresarial: ¿Cuándo dar el paso?

26 ARMANDO RIVERA FRANCO
Socio director de la sede de Piura



ALERTA MÁXIMA

Establecen plazo de presentación de la declaración del beneficiario final para determinados sujetos.

29



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * Webinars y eventos exclusivos
- * 71st International PRAC Conference

33



COLUMNAS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 220

ESTUDIO MUÑOZ
MUNÍZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Emely Mattos

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

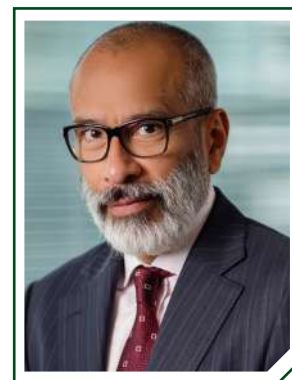
El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñoz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC
IDEAS & SOLUCIONES

editor.open@gmail.com
T- (51) 993416556

"Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras." **Hannah Arendt. La mentira como herramienta de poder**



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

“Caballero, tres funciones, tres, pase caballero”

(La frase, antiguo utilizada por los cómicos de circo, comúnmente conocidos bajo el apelativo de payasos, no tiene consenso pacífico en cuanto a su origen y significado, pero calza perfectamente bien con el tema -objeto del editorial-tratado)

En la antigua Roma se accedía a la magistratura sin esperar nada a cambio, léase alguna retribución económica o sucedáneo, al entenderse que, alcanzarla, era cuestión de mérito y prestigio; por el honor que significaba atender intereses colectivos sobre los propios.

En nuestro país, como síntoma de la paulatina degradación del aparato estatal, hace rato que el acceso a los cargos públicos en general y los del Congreso y magistratura en particular han dejado de tener tal sustrato «idílico o romántico»; pues los protagonistas de nuestra escena política lo último que persiguen es el honor y el prestigio detrás del bienestar público o social.

Una de las principales funciones del Estado (para no hablar de «poderes» estatales) es la persecución del delito, monopolizando el uso legítimo de la fuerza punitiva a través del Ministerio Público (MP). Esta institución -en tiempos de inseguridad ciudadana, desgobierno e iniciativas legislativas delirantes- se encuentra descabezada y venida a menos; pues sus principales autoridades han dejado de lado su rol principal, el bienestar público, dando paso a intereses particulares o ansias de poder desmedido.

Así tenemos que, por un lado, la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ) -con el voto de seis de sus miembros- repuso (al menos formalmente) en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la nación a la Sra. Patricia Benavides (PB), a quien la misma entidad (bajo otra composición de integrantes) destituyó por falta grave; al remover indebidamente y arbitrariamente a la fiscal encargada de investigar a su hermana, jueza del Poder Judicial.

En efecto, alegando una afectación al derecho de defensa de PB, la actual JNJ declaró la nulidad de su primera decisión, ordenando la reposición de esta última como fiscal suprema y, además, como fiscal de la nación¹.

Y por el otro, la Sra. Delia Espinoza, fiscal de la nación en ejercicio, legítimamente designada por la Junta de Fiscales Supremos luego

de la remoción de PB, se mostró reacia a acatar la orden de la JNJ, recurriendo a métodos que flaco favor le hacen a la institucionalidad democrática; tales como vigiliadas, atrincheramiento en las instalaciones de la entidad, declaraciones altisonantes² y una andanada de acciones judiciales de toda índole contra la JNJ, tiros y troyanos. Alguna de esas acciones, tramitadas a «velocidad supersónica» que ya quisiéramos los litigantes de a pie poder conseguir alguna vez. Pero, sobre todo, se sirvió de métodos en los que el MP fue instrumentalizado para iniciar investigaciones contra los miembros de la JNJ y pedir, jurisdiccionalmente, la suspensión de PB en el cargo; pedido este último que, con una rapidez una vez más inédita, fue concedido.

El penoso espectáculo protagonizado por la JNJ y el MP tuvo varios episodios, cada uno más vergonzoso que el otro; pero el «estelar» quizás fue el que acometieron los miembros de aquella entidad (6) al emitir un mensaje televisado a la nación; mediante el cual llamaron al diálogo (sin éxito) a las directamente involucradas, para inmediatamente luego amenazar a la fiscal de la nación en ejercicio con la ejecución de lo decidido, vía el empleo de la fuerza pública.

Todo lo anterior, dicho sea de paso, bajo una cobertura mediática que siguió minuto a minuto (como que de un espectáculo deportivo se tratase) el desarrollo de los vergonzosos acontecimientos; digna muy probablemente de un tratamiento especial y más sesudo, pues es evidente que la cobertura mediática a la que nos referimos y a la que ya estamos acostumbrados jugó un papel vergonzoso también, alejándose de la acepción contemporánea de «informar» (hacer saber algo a alguien³), orientándose cada vez más a su sentido etimológico (informare, que significa «dar forma»).

De forma tal que las noticias -según el bando que las propalara- tenían sus propios «periodistas» y entrevistados (en realidad voceros); unos expresando a la vez que «informando» que toda la razón la tenía la JNJ, y otros diciendo exactamente lo contrario. Lo único que a la ciudadanía le quedó muy claro es que ambos bandos defendían intereses, unos más oscuros que otros.]]]

¹ Lo cierto es que, dados sus muy pobres pergaminos (basta ver y oír sus paupérrimas declaraciones en toda clase de medios) y el penoso episodio de su tesis, es claro que PB jamás debió ser designada para ocupar un puesto público de tal envergadura.

² Delia Espinoza: «Es el Ministerio Público que merece ser respetado. Y nosotros somos el ejemplo de decencia, de democracia, de legalidad; porque la Constitución nos encarga esa noble misión, de defenderla; y si la tengo que defender particularmente con mi vida, lo voy a hacer». <https://www.infobae.com/peru/2025/06/16/delia-espinosa-advierde-delitos-en-intento-de-patricia-benavides-de-tomar-la-fiscalia-habra-consecuencias/>.

³ RAE, primera acepción

"This constant lying is not aimed at making people believe a lie, but at ensuring that no one believes anything anymore. A people that can no longer distinguish between truth and lies cannot distinguish between right and wrong. And such a people, deprived of the power to think and judge, is, without knowing and willing it, completely subjected to the rule of lies. With such a people, you can do whatever you want." **Hannah Arendt.** Lies as a tool of power.

«Sir. three shows, three-come on in, sir»

(The phrase, once used by circus performers, commonly known as clowns, does not have a clear consensus regarding its origin and meaning, but it fits perfectly well with the subject to be discussed in this editorial)

In ancient Rome, magistrates assumed office without expecting any form of compensation or otherwise, since it was understood that reaching such a position was a matter of merit and prestige; a privilege grounded in the honor of serving collective interests above personal ones.

In our country, as a symptom of the gradual erosion of the state apparatus, access to public office-particularly positions within Congress and the judiciary-has long abandoned any semblance of an "idyllic or romantic" foundation. The key figures of our political landscape seldom pursue honor and prestige through genuine service to the public or social welfare.

One of the primary functions of the State (without referring to "branches of powers") is the prosecution of crime, which involves the exclusive authority to exercise legitimate punitive force through the Public Prosecutor's Office (MP). This institution -particularly in times of citizen insecurity, mismanagement, and reckless legislative measures- has become leaderless and has fallen into disrepair, as its main authorities have abandoned their main role of serving the public welfare, instead succumbing to private interests or an insatiable thirst for unchecked power.

Thus, on the one hand, the current National Justice Board (JNJ), with the vote of six of its members, formally reinstated Ms. Patricia Benavides (PB) to the position of Supreme Prosecutor and National Prosecutor-a role from which she had been dismissed by the same institution (under another composition of its members) for serious misconduct, namely, unjustly and arbitrarily removing the prosecutor responsible for investigating her sister, a judge of the Judiciary.

In fact, claiming a violation of PB's right to defense, the current JNJ declared null its initial decision and ordered her reinstatement as both Supreme Prosecutor and National Prosecutor¹.

On the other hand, Ms. Delia Espinoza (DE), the incumbent National Prosecutor appointed legally by the Board of Supreme

Prosecutors following PB's removal, was reluctant to comply with the order of the JNJ. DE resorted to actions that undermine democratic institutions, such as vigils, barricades around the agency's facilities, overblown statements,² and a barrage of legal challenges of all kinds against the JNJ, Tyrians and Trojans. Some of these lawsuits processed at "supersonic speed"- a pace that we, ordinary litigants, would hope to someday reach. But, most notably, it employed methods that weaponized the MP to initiate investigations against members of the JNJ and, asked the courts to suspend PB from office; the latter request was granted once again with unprecedented speed.

The distressing display orchestrated by the JNJ and the MP involved several episodes, each more shameful than the last. However, the most infamous was perhaps the one where six (6) of the JNJ issued a televised message to the nation, calling for dialogue (which ultimately failed) with those directly involved. In that message, they immediately threatened the acting National Prosecutor with the use of force to enforce the decision, should dialogue prove impossible.

All of the above, incidentally, was covered by the media in a minute-by-minute broadcast-almost like a sports event- tracking the development of these shameful incidents. This coverage arguably deserves a special and more thorough analysis, as it is evident that the role played by the media-familiar to us-was shameful as well. It diverged from the modern understanding of "to inform" (to let someone know something³) and shifted towards its etymological roots (informare, meaning "to shape").

In this way, the news -depending on which side propagated it- had its own "journalists" and interviewees (in reality, spokespersons); some presenting themselves as "informing" that the JNJ was entirely correct, while others stating exactly the opposite. The only thing that became truly clear to the public was that both sides were defending interests, some more obscure than others.)))

¹ The truth is that, considering her very poor track record-evidenced by her dismissive statements across various media channels-and the disgraceful episode involving her thesis, it is clear that PB should never have been appointed to a public position of such significance.

² Delia Espinoza: "It is the Public Prosecutor's Office that must be respected. We stand as an example of decency, democracy, and legality, because the Constitution has entrusted us with this noble mission: to defend it. And if I must defend it, especially with my life, I will do so". <https://www.infobae.com/peru/2025/06/16/delia-espinoza-advierte-delitos-en-intento-de-patricia-benavides-de-tomar-la-fiscalia-habra-consecuencias/>

³ RAE, first meaning



ACTUALIDAD DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL PERÚ

La energía solar fotovoltaica (aquella proveniente de la radiación solar que a través del uso de paneles fotovoltaicos puede convertirse en energía eléctrica) ha emergido como una de las fuentes de energía renovable más prometedoras en el mundo, y Perú no es la excepción. Gracias a la privilegiada ubicación geográfica de nuestro país, con altos niveles de radiación solar en buena parte de su territorio (como en Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna), existe un enorme potencial para aprovechar esta tecnología y contribuir significativamente a la transición energética.

La creciente demanda de energía limpia por parte de industrias, junto con los avances tecnológicos que han reducido significativamente los costos de instalación y operación de paneles solares han venido incrementando los niveles de inversión en proyectos solares en el país. Así, según información reciente del Ministerio de Energía y Minas - Minem¹, actualmente existe una cartera de 14 proyectos de centrales solares fotovoltaicas que se construirán en diversas regiones en los próximos años, las cuales entrarán en operación comercial hasta el 2028, e inyectarán 2,447 megavatios (MW) de potencia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN.

La promoción del Estado a este tipo de proyecto ha mostrado un mayor nivel en este año 2025 con las recientes modificaciones realizadas mediante la Ley n° 32249 en la Ley n° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica ("LGE") que, aunque a la fecha está pendiente de reglamentación, sin duda creemos que incidirán en el incremento de proyectos fotovoltaicos, por lo siguiente:

- i. El separar a la potencia firme y a la energía firme como productos distintos, que pueden comercializarse de manera separada o conjunta, permitirá que las empresas que operen centrales solares fotovoltaicas puedan suscribir contratos de suministro de electricidad con distribuidores eléctricos y/o usuarios libres, sin necesidad de que

¹ <https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1140075-minem-peru-posee-una-cartera-de-14-proyectos-de-centrales-solares-que-suman-una-capacidad-de-2-447-mw>

previamente deban incurrir en costos de compra de potencia firme a otros generadores. De esa forma, se podrá superar la limitación de dichas centrales que, por su naturaleza intermitente al utilizar la radiación solar disponible durante el día, no cuentan con potencia firme².

- ii. El disponer que los distribuidores eléctricos bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) deben contratar el suministro eléctrico para sus sistemas aislados, mediante nuevas centrales de generación que se desarrollen en cumplimiento de los denominados Contratos Resultantes de Licitaciones, incentivará la construcción de centrales solares fotovoltaicas, pues los sistemas aislados se encuentran principalmente en la región selva, donde las condiciones climáticas para el desarrollo de tales centrales son positivas; como ya se ha demostrado con las centrales fotovoltaicas construidas para atender a sistemas aislados de empresas como Electro Oriente y Electro Ucayali para sustituir gradualmente su generación térmica.

Hoy en día en nuestro país la energía solar fotovoltaica viene siendo también una importante opción para autoproducción de electricidad, en el caso de empresas con grandes consumos que desean reducir su dependencia de la electricidad proveniente del SEIN y disminuir costos de electricidad y/o su huella de carbono. Una muestra de ello es la planta solar fotovoltaica construida por la empresa cementera Yura S.A. en Arequipa, con una potencia pico total de 31,07 megavatios pico (MWp)³.

El potencial de la energía solar fotovoltaica no solo se limita a la producción de electricidad para consumo, sino también para el uso de esta en el proceso de electrólisis para la producción de hidrógeno verde; vector energético -que aunque su desarrollo carece aún de la regulación necesaria que brinde certeza a las inversiones- viene tomando mayor impulso en nuestro país como se puede ver reflejado en el proyecto de hidrógeno verde que la empresa Phelan Green Energy pretende desarrollar en la región Arequipa⁴, y que involucra la construcción de una planta solar fotovoltaica con una potencia nominal de 1800 MW en el distrito de La Joya.

Claro que no todo es perfecto y el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en Perú enfrenta varios desafíos como: la necesidad de mejorar las redes de transmisión eléctrica para manejar su intermitencia; la disponibilidad de terrenos adecuados para grandes instalaciones solares; la competencia con otras fuentes de energía como el gas natural, que sigue siendo una opción económica para muchas industrias; y aunque cada vez en menor medida, también la falta de infraestructura de almacenamiento de energía que les permita ofrecer un suministro continuo y confiable durante las horas sin sol.

Pero, con todo, no cabe duda que la energía solar fotovoltaica representa una oportunidad única para Perú de avanzar hacia un futuro energético más limpio y sostenible; y que con inversiones estratégicas que se sustenten en políticas y regulaciones adecuadas, nuestro país puede convertirse en un referente regional en la transición hacia las energías renovables. »



RENATO VÁSQUEZ NINA

Asociado, experto en derecho de la Electricidad
Associate, Electricity law expert
rvasquezn@munizlaw.com

La energía solar fotovoltaica ha emergido como una de las fuentes de energía renovable más prometedoras en el mundo, y Perú no es la excepción. Gracias a la privilegiada ubicación geográfica de nuestro país, con altos niveles de radiación solar en buena parte de su territorio (como en Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna), existe un enorme potencial para aprovechar esta tecnología y contribuir significativamente a la transición energética.

² De acuerdo a la normativa vigente la potencia firme de centrales solares se determina considerando la producción de energía en las Horas de Punta del SEIN, que regularmente se producen en la noche.

³ <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2383115-1>

⁴ <https://www.elperuano.pe/noticia/250625-planta-solar-hay-interes-por-invertir-us-2500-millones>

Latest news on photovoltaic solar energy in Peru

Photovoltaic solar energy (which comes from solar radiation that - through the use of photovoltaic panels - can be converted into electrical energy) has emerged as one of the most promising renewable energy sources in the world, and Peru is no exception. Due to the extraordinary geographical location of our country, with high levels of solar radiation in a large part of the territory (such as Arequipa, Ica, Moquegua and Tacna), there is a huge potential to take advantage of this technology and significantly contribute to the energy transition.

The growing demand for clean energy by industries, together with technological advances that have significantly reduced the installation and operation costs of solar panels, have been increasing the levels of investment in solar projects in the country. Thus, according to recent information from the Ministry of Energy and Mines - MINEM¹ (acronym in Spanish), there is currently a portfolio of 14 solar photovoltaic power plant projects to be built in several regions in the next years, which would enter into commercial operation by 2028, and would inject 2,447 megawatts (MW) of power to the National Interconnected Electrical System - SEIN (acronym in Spanish).

The Government has been promoting this type of projects in 2025 with the recent amendments introduced by Law No. 32249 to Law No. 28832, Law to Ensure the Efficient Development of Electricity Generation ("LGE", acronym in Spanish) which to date is pending regulation, but we certainly believe that it will have an impact on the increase of photovoltaic projects, for the following reasons:

- i. Separating firm power and steady energy as different products which can be marketed both separately or jointly, will allow companies operating solar photovoltaic plants to enter into electricity supply contracts with electricity distributors and/or free users, without the need to previously incur the costs of purchasing firm power from other generators. Thus, it will be possible to overcome the limitation of these plants which, due to their intermittent nature of using the solar radiation available during the day, do not have firm power².
- ii. The provision that electricity distributors under the scope of the Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (National Fund for Financing the State's Business Activity) (Fonafe, acronym in Spanish) must hire the electricity supply for their isolated systems through new generation plants to be developed in compliance with the so-called Contracts Resulting from Bids, will encourage the construction of solar photovoltaic plants, since isolated systems are mainly located in the jungle region, where the climate conditions for the development of such plants are good, as it has already been demonstrated with the photovoltaic plants built to serve isolated systems of companies such as Electro Oriente and Electro Ucayali to gradually replace their thermal generation.

Nowadays, solar photovoltaic energy in our country is also becoming an important option for self-production of electricity, in the case of companies with large consumption and willing to reduce their dependence on electricity from SEIN, as well as reducing electricity costs and/or their carbon footprint. An example of this is the solar photovoltaic plant built by cement production company Yura S.A. in Arequipa, with a total peak power of 31.07 megawatt peak (MWp)³.

The potential of photovoltaic solar energy is not only limited to the production of electricity for consumption, but also to its use in the electrolysis process for the production of green hydrogen. Although its development still lacks the necessary regulation to provide certainty to investments, this energy vector is gaining momentum in our country as seen in the green hydrogen project that the company Phelan Green Energy intends to develop in the Arequipa region⁴, which involves the construction of a 1800 MW rated capacity solar photovoltaic plant in the district of La Joya.

Of course, nothing is perfect and the development of solar photovoltaic energy in Peru faces several challenges such as: the need to improve electricity transmission networks to manage their intermittency; the availability of land suitable for large solar installations; competition with other energy sources such as natural gas, which remains an economical option for many industries; and although to a lesser extent and decreasing, also the lack of energy storage infrastructure that would allow offering a continuous and reliable supply during the night hours.

However, there is no doubt that photovoltaic solar energy represents a unique opportunity for Peru to move towards a cleaner and more sustainable energy future. Our country can become a regional benchmark in the transition to renewable energies if strategic investments are supported by suitable policies and regulations.)))

¹ <https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1140075-minem-peru-posee-una-cartera-de-14-proyectos-de-centrales-solares-que-suman-una-capacidad-de-2-447-mw>.

² According to the current regulations, the firm power of solar power plants is determined considering the energy production during the SEIN's Peak Hours, which regularly occur at night.

³ <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2383115-1>.

⁴ <https://www.elperuano.pe/noticia/250625-planta-solar-hay-interes-por-invertir-us-2500-millones>



EL DERECHO DEPORTIVO EN EL PERÚ: UNA MIRADA AL FÚTBOL

En los últimos años, el derecho deportivo en el Perú, particularmente en el fútbol, ha ganado relevancia. Esto de la mano de su crecimiento como fenómeno económico, social y cultural. Sin embargo, su regulación aún presenta serias deficiencias y vacíos normativos que limitan su desarrollo. En el presente artículo, me permito ofrecer un análisis sobre su situación actual, destacando los puntos críticos, los avances recientes y la necesidad urgente de una reforma integral.



ALONSO VERA ALARCÓN

Socio senior, experto en derecho corporativo
Senior partner, Expert in corporate law
avera@munizlaw.com

1. Marco legal vigente

La Ley n.º 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (2003) es la norma marco que rige el sistema deportivo peruano. Complementan su contenido el reglamento de la ley, el Código Civil y normas laborales generales, además de los reglamentos internos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y otras federaciones deportivas.

En el plano internacional, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y otras entidades dictan normas que impactan directamente en la regulación nacional, como el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) y el Reglamento de Agentes de Fútbol (FFAR 2023).

2. Falencias estructurales

- a) Desactualización de la Ley n.º 28036
La ley data del 2003 y no incorpora temas relevantes, como:

En los últimos años, el derecho deportivo en el Perú, particularmente en el fútbol, ha ganado relevancia. Esto de la mano de su crecimiento como fenómeno económico, social y cultural. Sin embargo, su regulación aún presenta serias deficiencias y vacíos normativos que limitan su desarrollo.

Protección de los derechos de imagen de los deportistas.

Regulación efectiva de la actividad de agentes e intermediarios.

Control financiero de clubes y buen gobierno deportivo.

Mecanismos de arbitraje deportivo y solución de controversias.

b) Conflictos entre normas internacionales y nacionales.

En el caso del fútbol, las normas FIFA y de la FPF no siempre se armonizan con la legislación nacional, lo cual genera conflictos y falta de claridad jurídica. Un ejemplo es la falta de regulación local específica para las indemnizaciones por formación y los derechos de solidaridad.

c) Ausencia de un tribunal deportivo nacional autónomo.

Aunque existe la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, esta no cuenta con plena independencia. A diferencia de otros países como España (con el Tribunal Administrativo del Deporte), en Perú no existe un órgano nacional con competencias claras y acceso abierto para resolver conflictos deportivos.

3. Innovaciones y avances recientes

Implementación del Reglamento sobre Agentes de Fútbol (FFAR 2023): la FIFA exige que los agentes obtengan licencia y registro, lo que está empezando a ser adoptado en Perú, profesionalizando la representación de futbolistas y reduciendo conflictos de interés.

Licenciamiento de clubes: la FPF ha implementado un sistema inspirado en la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA), exigiendo sostenibilidad financiera y transparencia en la gestión de los clubes.

Ley n.º 31557 sobre apuestas deportivas: regula las apuestas deportivas a distancia, estableciendo un marco de fiscalización e impuestos que impacta indirectamente en el ecosistema deportivo.

4. Puntos críticos y recomendaciones

Reforma de la ley del deporte: una actualización debe incluir principios de buen gobierno, profesionalización dirigencial, equidad de género y protección de menores.

Creación de un Tribunal Nacional del Deporte: un órgano autónomo, imparcial y con competencia nacional, que garantice el debido proceso.

Educación y formación jurídica deportiva: promover programas de formación para abogados y dirigentes deportivos, y mejorar la comprensión de la lex sportiva internacional.

Conclusiones

Aunque existen avances importantes en materia de licenciamiento y regulación internacional, la base legal nacional es insuficiente para los retos actuales. Una reforma estructural permitirá consolidar un deporte profesional transparente, competitivo y alineado con los estándares internacionales. »

Sports Law in Peru: A Glance at Football (soccer)

In recent years, Sports Law in Peru, particularly in football (soccer), has gained increasing relevance. This growth is driven by soccer becoming a widespread economic, social, and cultural phenomenon. However, its regulation continues to show significant deficiencies and legal loopholes that hinder its development. In this article, I analyze the current situation of the sport, emphasizing on key issues, recent progress, and the urgent need for a comprehensive reform.

1. Current Legal Framework

Law 28036 - Law for the Promotion and Development of Sports (2003)- is the foundational regulation governing Peru's sports system. It is supplemented by the law's regulations, the Civil Code, and general labor regulations, in addition to the internal rules of the Peruvian Football Federation (FPF) and other sports federations.

At an international level, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and other entities set standards that directly impact national regulation, such as the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) and the Football Agent Regulations (FFAR 2023).

2. Structural Shortcomings

a) Outdated Law 28036

The law dates back to 2003 and does not consider relevant issues, such as:

- Protection of athletes' image rights.
- Effective regulation of agents and intermediaries.
- Financial oversight of clubs and good governance in sports.
- Sports arbitration and dispute settlement mechanisms.

b) Conflicts between international standards and national laws.

In the case of football, FIFA and FPF rules are not always aligned with national laws, leading to conflicts and legal ambiguities. An example is the lack of specific local rules for training compensation and solidarity mechanism.

c) Absence of an Autonomous National Sports Tribunal.

Although the FPF's Disciplinary and Dispute Resolution Chamber exists, it does not operate with full independence. Unlike countries such as Spain, which have a dedicated Administrative Tribunal for Sport, Peru lacks a national institution with clear jurisdiction and accessible procedures for resolving sports disputes.

3. Recent Innovations and Developments

Implementation of the FIFA Football Agent Regulations (FFAR 2023): FIFA now requires agents to obtain licenses and register, a practice that is gradually being adopted in Peru, thereby professionalizing player representation and helping to reduce conflicts of interest.

Club licensing: FPF has implemented a system inspired by the European Football Association (UEFA), requiring financial sustainability and transparency in club management.

Law 31557 on Sports Betting: regulates remote sports betting by establishing a framework for oversight and taxation, which in turn exerts an indirect influence on the overall sports ecosystem.

4. Critical Issues and Recommendations

Reform of Sports Law: an update should include principles of good governance, management professionalization, gender equality, and protection of minors.

Creation of a National Sports Tribunal: an autonomous, impartial body with national jurisdiction, responsible for guaranteeing due process.

Sports Legal Education and Training: promote programs to train lawyers and sports managers and improve understanding of the international lex sportiva.

Conclusions

Although significant progress has been made regarding licensing and international regulation, the national legal framework remains insufficient to address current challenges. A comprehensive reform would help consolidate of a transparent, competitive, and internationally aligned sports sector.)))

La responsabilidad del empleador: La acción preventiva en la seguridad y salud en el trabajo



AUGUSTO ESPINOZA PASQUEL
Asociado junior, experto en derecho laboral
y seguridad social
Expert Lawyer in labor and social security law
aespinzap@munizlaw.com

Solo basta hacer una rápida revisión de la Ley n.º 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para entender que la acción preventiva a cargo del empleador constituye la base de todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que la ley traslada a la patronal la responsabilidad de garantizar en el centro de trabajo, el establecimiento de medios y condiciones que garanticen una adecuada protección de la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores e incluso la de terceros.

No olvidemos que la inobservancia de la acción preventiva actúa como fuente generadora de responsabilidades; es decir, el empleador como garante de la seguridad y salud en el trabajo, asumirá las implicancias económicas derivadas de la acción sancionadora a cargo de la Sunafil y de las indemnizaciones por daños a la salud en el trabajo, legales (civiles, penales) y de cualquier otra índole de las consecuencias de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional que afecte al trabajador con ocasión del trabajo, incluso si se produce fuera del lugar y horas de trabajo cuando se trate de la ejecución de una actividad bajo su autoridad.

La implementación, y sobre todo el funcionamiento adecuado de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, requiere del compromiso de todas las partes implicadas; por un lado, el trabajador que deberá sujetarse a los lineamientos y directrices establecidas por la empresa para desempeñar su labor de manera segura y; por otro lado, el empleador, encargado de proporcionar los medios y recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión. Toda falla del sistema podría generar un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

Si nos centramos en dichos eventos no deseados, debemos considerar que la imputación de la responsabilidad del empleador por incumplimiento de su deber preventivo requiere necesariamente que se acredite la existencia de un nexo causal; es decir, que la causa del daño es consecuencia de la labor desempeñada por el trabajador y el incumplimiento de la patronal de las normas establecidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, contrario sensu si se prueba una actuación diligente, se desvanece la posibilidad de establecer responsabilidades.

La Sunafil, en cumplimiento de su labor fiscalizadora frente a un accidente de trabajo, llevará a cabo acciones para la verificación de componentes del Sistema de Gestión con el objeto de determinar la eficacia de la acción preventiva a cargo del empleador. A continuación, abordaremos brevemente algunos de los elementos recurrentemente revisados por la autoridad administrativa cuando se produce un accidente de trabajo:

- 1) **Condiciones:** relacionado con las máquinas y herramientas de trabajo asignados al trabajador que pueden actuar como agentes causantes de accidentes de trabajo sino se utilizan controles adecuados como los de ingeniería (guardas de seguridad) o equipos de protección personal.
- 2) **Supervisión:** alude a los procedimientos y métodos que han sido diseñados y establecidos por la empresa para medir, recopilar y prevenir los riesgos y peligros en el trabajo, y no a la simple acción de supervisar en la figura de una persona encargada.
- 3) **Formación e información:** a través de los procesos de inducción al momento de la contratación, que pueden ser de dos tipos: i) Inducciones generales, referido a los temas generales del sistema (políticas, reglamentos; etc.) y ii) las específicas: que brinda información y conocimientos para desempeñar de manera segura la labor objeto del contrato de trabajo; asimismo, las capacitaciones que no pueden ser menores a 4 en cada año de gestión, además de los procedimientos e instructivos de trabajo seguro.
- 4) **Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC):** que debe cumplir con los parámetros previstos por el Art. 77º del Reglamento de la Ley de SST; que permitirá identificar la existencia de un peligro y sus características, y que luego de evaluarlas se establecerán controles apropiados para reducir el riesgo.
- 5) **Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST):** cuya estructura debe estar alineada a los requisitos previstos por el Art. 74º del Reglamento de la Ley de SST y modelo propuesto por la Resolución Ministerial n.º 050-2013-TR. No obstante, la atención debe centrarse en los estándares de seguridad y salud en las operaciones, servicios y actividades conexas. ¶

Employer liability: Preventive Action related to Safety and Health at Work

A quick review of Law 29783, "Occupational Health and Safety Law," makes it clear that proactive prevention by employers is the foundation of the entire Occupational Health and Safety Management System. The law places the responsibility squarely on employers to establish the necessary measures and conditions in the workplace to adequately protect the lives, health, and well-being of workers and even third parties.

It is important to remember that the failure to follow preventive measures can lead to liability. As guarantors of occupational health and safety, employers would be responsible for the financial consequences resulting from SUNAFIL's sanctions, as well as for damages related to occupational health issues, legal (civil, criminal), and other repercussions arising from workplace accidents or occupational diseases. This liability extends even to incidents that occur outside of official working hours or the workplace, when such activities are conducted under the employers' authority.

The successful implementation and, most importantly, the effective operation of an Occupational Health and Safety Management System depend on the commitment of all involved parties. On one hand, workers must follow the guidelines and directives set by the company to ensure their safety while performing their duties. On the other hand, employers are responsible for providing the necessary resources and means to maintain and support the management system. Any failure in this system could lead to workplace accidents or occupational illnesses.

When considering such adverse events, it's important to recognize that an employer's liability for breach of their preventive duties requires establishing a causal link. In other words, there must be proof that the damage resulted from the worker's activities and the employer's failure to comply with occupational health and safety regulations. Conversely, if diligent measures are proven to be in place and properly followed, the liability of the employer can be effectively ruled out.

In its oversight role following an occupational accident, Sunafil conducts inspections to assess the components of the Management System and determine whether the employer's preventive measures have been effective. Next, we will briefly highlight some of the key elements that the administrative authority typically reviews when an occupational accident occurs:

- 1) *Conditions of machines and work tools:* This refers to the conditions and set up of the machines and tools assigned to workers. If proper controls-such as safety guards or personal protective equipment- are not in place or used, these can become sources of workplace accidents.
- 2) *Supervision:* This refers to the procedures and methods the company has put in place to assess, monitor, and prevent risks and hazards in the workplace. It is more than just having a designated person overseeing activities; it's about systematic processes to ensure safety measures are effectively implemented and maintained.
- 3) *Training and Information:* 4. This includes onboarding processes at the time of hiring, which can be divided into two categories: i) general induction-covering company policies, regulations, and overall safety systems-and ii) specific induction-providing detailed information and training to safely perform the specific job. Additionally, companies are required to hold at least four training sessions each year, focusing on procedures and instructions for safe work practices.
- 4) *Hazard Identification, Risk Assessment, and Control Matrix (IPERC):* This must follow the guidelines set out in Article 77 of the Regulations to the OHS Law. Its purpose is to identify hazards and their characteristics, and after assessing them, to establish appropriate controls to mitigate or eliminate risks.
- 5) *Internal Occupational Health and Safety Regulations (IOHSR):* The structure of these regulations must comply with the requirements set out in Article 74 of the Regulations to the OHS Law and adhere to the model recommended by Ministerial Resolution 050-2013-TR. They should focus on health and safety standards relevant to operations, services, and related activities.)))

Precedente vinculante establece reglas procesales para el proceso de cumplimiento

El pasado 9 de mayo fue publicado un nuevo precedente vinculante del Tribunal Constitucional que desarrolla vía jurisprudencia el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) -vigente desde el 22 de julio de 2021-. Este desarrollo tiene por finalidad fortalecer la tutela brindada por el proceso constitucional de cumplimiento, garantía constitucional que se encuentra consagrada en el artículo 200.6 de la Constitución y regulada en el NCPCo.

El precedente vinculante contenido en la sentencia emitida en el Expediente Nro. 04745-2022-PC/TC -CEPRODELDESA PERÚ- desarrolla los alcances del artículo 66 del NCPCo, estableciendo reglas sustanciales de carácter procesal, es decir, fijando los criterios que deben ser aplicados por el juez constitucional al momento de resolver la demanda de cumplimiento. La demanda de cumplimiento es el instrumento que tienen las personas para defenderse ante la arbitrariedad de un funcionario público que se muestra renuente a cumplir con un mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo firme, afectando los derechos del administrado.

En general, en lo que se refiere al proceso de cumplimiento, el NCPCo ha representado importantes cambios respecto de la regulación anterior de dicha garantía. En el antiguo código no se estableció ninguna disposición respecto de los criterios a utilizar por el juzgador en caso de que el mandato objeto de cumplimiento sea poco claro u objeto de interpretaciones dispares. En su momento, la principal regulación de este proceso se dio vía jurisprudencial a través del precedente vinculante Maximiliano Villanueva Valverde (Exp. Nro. 0168-2005-PC/TC). En dicho caso, se dispuso que el mandato debía de ser cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitadamente de la norma legal o del acto administrativo. Además, el mandato no podía estar sujeto ni a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

Con la anterior regulación, ante la duda de cumplimiento de los requisitos del mandato objeto del proceso de cumplimiento, el juez no podía realizar prácticamente ninguna labor cognoscitiva al respecto y la demanda era declarada improcedente. El mandato no podía ser objeto de interpretación ni tampoco estar sujeto a cualquier controversia que obligue al juez a la labor de dilucidar su verdadero

contenido. Estas reglas produjeron -en la práctica- que gran porcentaje de estas demandas sean declaradas improcedentes por las cortes.

En contraste con la anterior regulación, el artículo 66 del NCPCo contempla que el juez pueda realizar labor interpretativa sobre el mandato objeto de cumplimiento. Esta labor se puede dar, ya sea porque el mandato resulta ser genérico o poco claro o, inclusive, cuando esté sujeta a controversia compleja o interpretaciones dispares. La nueva regulación faculta al juez a entrar a esclarecer el fondo del asunto, ya sea a través de una interpretación previa de la norma o acto administrativo, o del esclarecimiento respecto de la complejidad de la controversia.

En el reciente precedente CEPRODELDESA PERÚ, el Tribunal Constitucional desarrolla los cambios normativos producidos en el proceso de cumplimiento como causa de la entrada en vigor del NCPCo. Lo primero que se destaca es que lo dispuesto en el nuevo código no desconoce ni deja sin efecto en su totalidad, pero sí introduce modificaciones a las reglas que se establecieron en el precedente Villanueva Valverde; en especial, en lo que se refiere a las reglas sustanciales para determinar qué es un mandato exigible en la vía del proceso de cumplimiento. Antes, ante la sola apariencia de imprecisión o complejidad de la controversia, el juzgado debía de declarar improcedente la demanda. Ahora, ante dichos escenarios, el juez ha sido proveído de herramientas para verificar a través de métodos interpretativos o actividad probatoria mínima si los obstáculos son insalvables de tramitar en la vía constitucional o si es posible su aclaración en dicha sede.

Continúan vigentes las reglas del precedente Villanueva Valverde que ordenan que el mandato objeto de cumplimiento debe ser uno vigente, cierto y claro. Sin embargo, ahora, ante la incertidumbre de la vigencia, certeza o claridad del mandato, el juez deberá realizar un ejercicio interpretativo de la norma utilizando los métodos clásicos de interpretación. Cuando la labor interpretativa recaiga sobre acto administrativo, el juez deberá observar los principios generales del derecho administrativo tanto de desarrollo legal como jurisprudencial. Por otro lado, cuando el juez perciba que el mandato puede estar sujeto a controversia compleja o a interpretaciones dispares, esclarecerá la controversial aplicando la antedicha actividad interpretativa y, además, una mínima actividad probatoria; es decir, una actividad probatoria que no comprometa la finalidad urgente del proceso de cumplimiento, pero que permita confirmar la veracidad del mandato.

Este desarrollo jurisprudencial mantiene la línea seguida por el cambio de normativa establecido en el NCPCo que busca hacer fortalecer y hacer más eficaz la tutela brindada por el proceso de cumplimiento. ¶

El pasado 9 de mayo fue publicado un nuevo precedente vinculante del Tribunal Constitucional que desarrolla vía jurisprudencia el Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) -vigente desde el 22 de julio de 2021-. Este desarrollo tiene por finalidad fortalecer la tutela brindada por el proceso constitucional de cumplimiento, garantía constitucional que se encuentra consagrada en el artículo 200.6 de la Constitución y regulada en el NCPCo.



MATEO SALINAS FETZER

Asociado senior, experto en litigios y controversias
Senior associate, Litigation & dispute resolution
msalinasf@munizlaw.com

Binding precedent establishes procedural rules for the compliance process

On May 9, the Constitutional Court published a new binding precedent, which develops through jurisprudence the scope of the New Constitutional Procedural Code (NCPCo), effective as of July 22, 2021. The purpose of this development is to enhance the protection offered by the constitutional compliance procedure, a constitutional guarantee enshrined in Article 200.6 of the Constitution and regulated within the NCPCo.

The binding precedent articulated in the judgment in Case No. 04745-2022-PC/TC -CEPRODELDESA PERU-clarifies the scope of Article 66 of the NCPCo, establishing important substantial procedural rules. Specifically, it sets out the criteria that constitutional judges must apply when resolving a compliance claim. The compliance action serves as a constitutional safeguard allowing individuals to defend themselves against arbitrary conduct by public officials who refuse to comply with a legal mandate or a final administrative decision, thereby affecting the rights of the individual affected.

In general, the NCPCo has introduced significant changes regarding the compliance process compared to the previous regulation of such guarantee. The old code did not include any provision regarding the criteria that the judge should apply when the mandate being enforced is unclear or subject to conflicting interpretations. At the time, the main regulation was established through jurisprudence (case law), specifically the binding precedent Maximiliano Villanueva Valverde (Case No. 0168-2005-PC/TC). In this case, the court established that the mandate must be certain and clear, meaning it must be unquestionably inferred from the legal norm or the administrative act. Moreover, the mandate could not be involved in complex controversies or subject to conflicting interpretations.

Under the previous regulation, if there was doubt about whether the requirements of the mandate involved in the compliance proceeding had been satisfied, the court could perform almost no substantive analysis, and the claim was declared inadmissible. The mandate could not be interpreted, nor could it be entangled in controversy that required the court to clarify its true content. As a result, these rules led to a high percentage of such claims being rejected by the courts.

In contrast, Article 66 of the NCPCo provides that the judge may engage in interpretative work regarding the mandate

to be enforced. This can occur when the mandate is vague or generic, or when it is involved in complex disputes or conflicting interpretations. The new regulation grants the court the authority to clarify the merits of the case, either by interpreting the relevant rule or administrative act beforehand, or by resolving the complexity of the controversy itself.

In the recent precedent CEPRODELDESA PERU, the Constitutional Court elaborates on the normative changes introduced in the compliance procedure as a consequence of the entry into force of the NCPCo. The first notable aspect is that the provisions of the new code do not completely disregard or nullify previous rules; rather, they introduce amendments to the rules established in the Villanueva Valverde precedent, particularly concerning the substantive criteria for determining what constitutes an enforceable mandate in the compliance proceeding. Previously, the court was required to declare the claim inadmissible solely based on the appearance of vagueness or complexity of the dispute. Now, faced with such scenarios, the court has been given tools-through interpretative methods or minimal evidentiary activity-to verify whether these obstacles are insurmountable for processing through constitutional channels or whether they can be clarified within that jurisdiction.

The established in the Villanueva Valverde precedent remain in effect, which require that the mandate to be enforced must be valid, certain, and clear. However, now, in case of doubt regarding the validity, certainty, or clarity of the mandate, the court must perform an interpretative exercise of the norm using traditional methods of interpretation. When the interpretative work pertains to an administrative act, the court must consider the fundamental principles of administrative act, including both legal and jurisprudential development. Conversely, if the court perceives that the mandate may be subject to complex controversy or conflicting interpretations, they will resolve the dispute through the aforementioned interpretative activity and, additionally, conduct a minimal level of evidentiary activity-meaning, an evidentiary process that does not compromise the urgent purpose of the compliance proceeding but allows for the verification of the mandate's accuracy.

This jurisprudential development continues the approach adopted by the changes in the NCPCo regulations, which aim to strengthen and enhance the effectiveness of the protections offered by the compliance process. ¶

Los riesgos adicionales de comprar una empresa en el Perú

Antes de comprar una empresa sabemos que se debe evaluar, normalmente a través de un proceso de *due diligence* o debida diligencia, cómo está la empresa que estamos interesados en comprar. Usualmente la revisión está en analizar las posibles contingencias tributarias, laborales, así como aquellos relacionados al sector del negocio que se está interesado en comprar; por ejemplo, algún tipo de permiso especial. Sin embargo, en los últimos meses, al momento de negociar un contrato de compraventa de empresas, estamos encontrándonos con la necesidad de evaluar otros asuntos que aparentemente no son legales.

Un asunto que nos viene acompañando en los últimos años es la inestabilidad política y regulatoria. Somos un país particular que, a pesar de haber tenido varios presidentes en un solo periodo presidencial, hemos seguido avanzando. Sin embargo, esto no significa que debemos tener en cuenta cambios frecuentes en normas tributarias, laborales, ambientales u otros que generan incertidumbre, y además podrían mermar el valor del negocio que estamos comprando; lo que puede eventualmente hacer que paguemos un precio alto y después el valor del negocio disminuya.

En esa línea, está el riesgo a la interpretación de las normas, que a veces puede ser impredecibles (por ejemplo, de la Sunat o el Indecopi).

El tema de la criminalidad y seguridad ciudadana es una situación preocupante para todos los negocios y de todos los rubros. Los costos en seguridad de casi todas las empresas se han incrementado en un 100%. A pesar de ello, las noticias no son alentadoras y la delincuencia sigue aumentando en absolutamente todos los sectores, desde bodegas hasta gran minería, y esto afecta las operaciones diarias generando un enorme riesgo a clientes y empleados; lo que generará que la empresa tenga que incluso asumir más recursos en intentar mitigar este riesgo.

Por otro lado, las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos afectarán de todas formas las exportaciones peruanas que, según el Banco Central de Reserva del Perú, el año 2024 representaron 26.2% del PBI (Producto Bruto Interno), donde la minería y la agroindustria juegan un rol fundamental. Al momento de negociar un contrato de compraventa de acciones de un negocio vinculado a sectores que exportan,



deberá evaluarse cómo se debe redactar el contrato de tal manera que se mitigue el riesgo para el comprador.

Parte de la labor de los abogados es explicar a nuestros clientes, especialmente inversionistas extranjeros, que la economía peruana es principalmente informal y que, si bien hacer un *due diligence* es obligatorio para tener claros los riesgos que se van a asumir, es posible que algunas empresas operen parcialmente en la informalidad y el reporte de *due diligence* esté parcialmente distorsionado existiendo mayores riesgos fiscales y laborales de los que se puedan ver en el reporte.

Hay otros temas para tener en cuenta como las posibles judicializaciones de controversias con un sistema judicial lento y poco predecible. Litigar por temas contractuales o tributarios puede tomar años sin garantía de imparcialidad. Además, los riesgos reputacionales como asociaciones con antiguos accionistas vinculados a escándalos de corrupción o incumplimientos pueden afectar el valor de la marca o relaciones comerciales. Puede haber restricciones financieras y acceso a crédito con elevadas tasas de interés y restricciones al financiamiento interno que dificultan apalancar operaciones post-adquisición.

Finalmente, las contingencias medioambientales no registradas en sectores como minería, agroindustria o inmobiliario pueden generar pasivos ambientales no regularizados que generan multas o costos de remediación futuros.

En conclusión, comprar una empresa no es solo hacer un *due diligence* y negociar el contrato de compraventa de acciones, hay que evaluar el contexto del lugar donde se comprará el negocio. Esto representa un gran reto cuando se trata de una empresa peruana; además de una oportunidad para los abogados que dan valor agregado al momento de asesorar a sus clientes. »

Antes de comprar una empresa sabemos que se debe evaluar, normalmente a través de un proceso de due diligence o debida diligencia, cómo está la empresa que estamos interesados en comprar.



ALEJANDRA SANTISTEVAN DE LAS CASAS
Asociada senior, experta en derecho corporativo
Senior associate, Corporate law expert
asantistevan@munizlaw.com

Additional risks of buying a company in Peru

We know that, before buying a company, we must assess the status of the company of our interest, usually through a due diligence process. Usually the review consists of analyzing the probable tax and labor contingencies, as well as those related to the sector the business of interest belongs; for example, any type of special permit. However, in recent months, when negotiating a sales agreement of companies, we find it necessary to assess other issues that are - apparently - not legal.

An issue that persists for the last few years is political and regulatory instability. We are a special country that has continued to move forward despite having had several presidents throughout a single presidential term. However, it does not mean that we should consider frequent changes in tax, labor, environmental or other regulations that create uncertainty and may also reduce the value of the business to be bought, which may eventually lead to overpayment followed by a decrease in its value. In this regard, there is a risk related to the interpretation of regulations, which can sometimes be unpredictable (for example, those from SUNAT or INDECOPI).

The issue of crime and citizen safety is a worrying situation for all businesses in all industries. The security costs of almost all companies have increased by 100%. Despite this, the news are not encouraging and crime keeps increasing in absolutely all sectors from grocery stores to the large mining industry. This has an impact on daily operations, creating a significant risk for customers and employees, which will force the company to allocate more resources to try to mitigate this risk.

On the other hand, the new U.S. government policies will affect Peruvian exports anyway, which represented 26,2% of GDP (Gross Domestic Product) in 2024, according to the Central Reserve Bank of Peru, with mining and agribusiness playing a key role. When negotiating a share purchase agreement for a business related to exporting sectors, the wording of the agreement must be assessed in order to mitigate the risk for the purchaser.

Part of the lawyers' role is to explain to our clients, especially to foreign investors, that the Peruvian economy is mainly informal. While conducting due diligence is essential to identify the risks to be undertaken, some companies may partially operate in the informal sector, thus resulting in a partially distorted due diligence report, leading to higher tax and labor risks than those shown in the report.

There are other issues to consider, such as a possible dispute resolution in court, considering our slow and unpredictable Judiciary. A trial on contractual or tax issues may take years and impartiality is not guaranteed. In addition, it implies a risk on reputation for being related to former shareholders linked to corruption scandals or breaches which may affect the brand value or business relationships. There may be financial restrictions and access to credit with high interest rates, as well as restrictions on internal funding that make it difficult to leverage post-acquisition operations.

Finally, unregistered environmental contingencies in sectors such as mining, agroindustry or real estate may result in unregulated environmental liabilities which lead to fines or future remediation costs.

In conclusion, buying a company is not just about doing due diligence and negotiating the share purchase agreement, it requires evaluating the context of the place where the business to be bought is located. This represents a big challenge when it comes to a Peruvian company, but is also an opportunity for lawyers to give value added when advising their clients.)))

Del TikTok al registro: ¿Frasas virales distintivas como marcas?

En las redes sociales constantemente se crean divertidas y diversas frases que luego se popularizan y pueden convertirse en marcas, pero este fenómeno no es nuevo, puesto que hace algunos años atrás, la televisión cumplía el rol de viralizar contenidos que generasen interés o resultasen atractivos. Ante estos sucesos, nos preguntamos ¿puede una frase viral convertirse en marca en nuestro país? En las siguientes líneas intentaremos responder dicha interrogante.

La normativa peruana, a través del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indica que “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. En ese sentido, la norma es clara cuando indica que los requisitos para el registro de marca son 1) que el signo cumpla la función de distinguir productos o servicios, y 2) que sea susceptible de representación gráfica. Indica además que pueden ser palabras, imágenes, números, letras, entre otros.

Por otro lado, el mismo cuerpo normativo, a través del artículo 135 inciso b), indica que no se podrá registrar como marca un signo que carezca de distintividad. Ahora bien, Schmitz Vaccaro¹ indica que la distintividad es “la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores”. Asimismo, Arana² argumenta que “la no distintividad de una marca es tratada en la doctrina y jurisprudencia en el derecho marcario como el no cumplimiento de la función jurídica esencial identificadora y diferenciadora de la marca en el mercado en su contexto empresarial”.

En ese sentido, ante la pregunta si una frase o palabra viral puede ser registrada como marca, la respuesta es sí. No obstante, debemos tener en cuenta que el elemento cuya titularidad de marca se pretende debe cumplir con ser distintiva, es decir, debe ser pasible de ser asociada a un producto o servicio existente del mercado y debe ser diferente a las marcas de su competencia. En contrario sensu, no todas las frases virales de internet podrán lograr obtener el nivel distintivo requerido por el Indecopi para inscribir el signo marcario, y por ello, debemos analizarlo según cada caso en concreto.

¹ SCHMITZ VACCARO, Christian (2012) “Distintividad y uso de las marcas comerciales”. Revista Chilena de Derecho. Vol. 39 N°1, pp.9 - 31 [2012]. Web https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372012000100002&script=sci_arttext#n00

² ARANA COURREJOLLES, M. del C. (2011). “La No Distintividad Marcaria”. Derecho & Sociedad, (36), 269-274. Web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13233>

Sin perjuicio de ello, la distintividad es un concepto relativo y requiere de un esfuerzo adicional por parte de la autoridad al momento de analizar el caso. Así, indica Schmitz Vaccaro³ que “(...) *la distintividad es un concepto dinámico en el tiempo y gradual en cuanto a su intensidad. En otras palabras, un mismo signo puede estar expuesto a variaciones temporales en lo que a su grado de distintividad se refiere, e igualmente existen signos más o menos distintivos que otros*”.

No podemos dejar de mencionar que, en marcas, nos regimos por el principio de especialidad, lo cual indica que una marca está protegida en la clase de Niza (o clasificación internacional) para la cual ha sido registrada, y el titular de una marca no puede impedir el registro y/o uso de una marca similar o idéntica en una clase distinta y no vinculada. Así, si una marca está protegida en la clase 05 para productos farmacéuticos, el titular de dicha marca no puede impedir que un tercero obtenga el registro de la misma marca o similar para servicios de publicidad de la clase 35, por ejemplo.

Otro punto relevante para mencionar es que, a diferencia de otras jurisdicciones como Estados Unidos o Puerto Rico, en el Perú se aplica el principio *prior tempore, potior iure* (primero en el tiempo, primero en el derecho), lo cual implica que el derecho sobre la titularidad de una marca se obtiene con el registro, mas no con el uso. En consecuencia, en un entorno tan dinámico y perecedero como el de las redes sociales, donde las expresiones y contenidos virales surgen y desaparecen con prontitud, será quien solicite primero el registro –cumpliendo los requisitos legales– quien posiblemente obtenga la titularidad exclusiva sobre dicha frase como marca.

Así, volviendo a nuestro tema principal, nos gustaría traer a colación que en nuestro país se han registrado las siguientes frases televisivas⁴: **“LA FE ES LO MÁS LINDO DE LA VIDA”** como marca por el futbolista Luis Alberto Guadalupe, más conocido como Luis “Cuto”

Guadalupe, para proteger “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales” de la clase 41; **“QUE PASE EL DESGRACIADO”** como marca por la conductora de televisión Laura Bozzo para proteger “Servicios de artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento; representación de espectáculos de variedades; (...)”⁵ de la clase 41; **“¡ASU MARE!”** como marca por el actor Carlos Alcántara, para proteger “Servicios de educación, formación; actividades deportivas y culturales; videos; servicios de entretenimiento y recreación; eventos y festivales de actividades culturales, recreativas, artísticas, educativas, deportivas y de esparcimiento; organización de eventos con fines de entretenimiento; conciertos, actividades gastronómicas; producción fonográfica y audiovisual, de películas para cine, de programas de TV y radio, de espectáculos musicales y de concursos con fines culturales y de entretenimiento; (...)”⁶ de la clase 41.

En cuanto a las frases de TikTok y redes sociales, durante el 2024 y 2025, se han popularizado diversos signos o frases, y los empresarios han empezado a solicitar y obtener registros de marcas aprovechando la oportunidad de que dicho término está de moda.

Recordemos el caso peruano **“CAPIBARA”**. Si bien el autor no era identificable (llámese a la persona que inventó o creó el animalito como tendencia), un ciudadano chino solicitó en 2024 la marca en cuestión para productos de la clase 16⁷, y fue otorgada en ese mismo año. ¿Ello implica que nadie más la puede usar? No. Como explicamos líneas arriba, la marca está protegida para productos de clase 16, por tanto, la marca –de estar libre– podría ser registrada y usada para productos de otra clase distinta y no vinculada. Sobre este caso, al cierre de este artículo, se ha verificado que la marca cuenta con seis procedimientos de nulidad en trámite. En este caso, solo podemos decir una vez más, “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

³ SCHMITZ VACCARO, Christian (2012). Op. Cit. 9-31

⁴ Revisado en <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/962931-indecopi-conoce-cuatro-frases-y-expresiones-peruanas-populares-que-estan-registradas-como-marcas>

⁵ (...) representación de espectáculos en vivo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; producción de espectáculos; montaje de programas de radio y televisión; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por radio y televisión.

⁶ (...) publicación y edición de libros, proyección de videos; servicios de biblioteca; publicación de textos que no sean publicitarios, publicaciones periódicas y de artículos de libros electrónicos en línea no descargables, alquiler de películas cinematográficas, exhibición de películas cinematográficas, alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos, estudios de cine, grabación y/o filmación en cintas de vídeo, montaje de cintas de vídeo.

⁷ Productos registrados: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta, lapiceros y lápices.



Cabe precisar, además, que el término “**CAPIBARA**” está incluido en diversas marcas en la clase 25 para prendas de vestir; por tanto, la palabra en cuestión en dicha clase es ahora de uso común. Esto implica que ninguna persona tendría la exclusividad de dicho término para ropa.

Asimismo, comercializar una prenda de vestir con la imagen de un capibara no es hacer uso de la marca “**CAPIBARA**”, puesto que para acreditar el uso tendría que aparecer en la etiqueta de la prenda de vestir (la que señala la forma de lavado, planchado y cuidado de la prenda) la marca “**CAPIBARA**”.

Otro caso es la marca “**CHOLLYWOOD PLANET**” registrada en 2016 por un ciudadano peruano para proteger “educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, producción de programas de televisión” de la clase 41. Si bien la palabra “CHOLLYWOOD” se habría hecho conocida por la conductora de televisión Magaly Medina, el titular de la marca “**CHOLLYWOOD PLANET**” se adelantó y registró la marca a su nombre, al estar libre en el sistema de registros y no requerirse prueba de uso previo.

Así, diversos personajes, contenidos, palabras, se crean en las redes sociales –y sobre todo en TikTok– y sería interesante conocer la decisión del Indecopi sobre la distintividad de esas marcas en caso algunos *influencers* quisieran registrar sus frases icónicas como por ejemplo “Perdónenme a todos, no acepto” de

la novia fugitiva de Bagua, “Efe bebé” (F BB) del *influencer* Jean Villón, “Tumba la fiesta” del *influencer* Valentino Palacios, entre otros, puesto que estos se deberán asociar a una clase específica, y así distinguir un determinado bien o servicio.

Las clases que suelen escoger este tipo de frases o signos son la clase 16 (papelería en general), clase 25 (prendas de vestir) y clase 41 (servicios de entretenimiento), pero el meollo del asunto no es solo elegir una clase y productos/servicios, sino también que la marca realmente pretenda distinguir esos productos en el mercado. Caso contrario, existe el peligro de que un tercero pretenda obtener el registro de dicha frase o expresión como marca.

En un entorno donde el contenido es inestable y desaparece para darle espacio a nueva información, el tiempo resulta determinante para la protección o pérdida de un elemento registrable a través de la propiedad intelectual, así como tener la pericia para distinguir un meme vs. un producto comercializable.))



JULIANA DEL AGUILA INAPI
Asociada, experta en propiedad intelectual
Associate, Intellectual property lawyer
jdelaguila@munizlaw.com

From TikTok to Registration: Can viral phrases be trademarked?

Fun and diverse phrases are constantly being created on social networks, gaining popularity and potentially becoming brands. This phenomenon is not new; for years, television has played a significant role in viralizing content that captures attention or appears appealing. Given this reality, we ask ourselves: Can a viral phrase become a registered trademark in our country? In the following discussion, we will explore this question.

Peruvian legislation, through Article 134 of Decision 486 of the Andean Community, states that "(...) any sign capable of distinguishing goods or services on the market shall constitute a mark. Signs that are susceptible of graphic representation may be registered as marks. The nature of the product or service to which a mark is to be affixed shall in no case be an obstacle to the registration thereof". This, the law clearly establishes that the requirements for registering a trademark are twofold: 1) the sign must serve to distinguish products or services, and 2) the sign must be susceptible to graphic representation. These signs may include words, images, numbers, letters, among others.

Furthermore, the same regulatory body, through Article 135 paragraph b), states that a sign lacking distinctiveness cannot be registered as a trademark. As Schmitz Vaccaro¹ explains distinctiveness is "the ability of a sign to set apart and differentiate a company's products or services from those of its competitors". Similarly, Arana² argues that "the non-distinctiveness of a trademark is regarded in trademark doctrine and jurisprudence as the failure to fulfill the essential legal function of identifying and differentiating the mark within the market in its business context".

In this sense, when asked whether a phrase or viral term can be registered as a trademark, the short answer is yes. However, it is crucial to remember that the element sought for trademark protection must be distinctive, meaning it must be capable of being associated with an existing product or service in the market and must differentiate itself from competitors' trademark. On the

contrary, not all viral internet phrases will meet the lever of distinctiveness required by INDECOPI for trademark registration. Each case must, therefore, be evaluated individually.

Furthermore, the concept of distinctiveness is relative and requires additional effort from the authority when analyzing the case. As Schmitz Vaccaro³ states "(...) distinctiveness is a dynamic concept over time and varies in intensity. In other words, the same mark may undergo temporal changes in its degree of distinctiveness, and some signs are more or less distinctive than others".

We must emphasize that, in trademark matters, the principle of specialty (or specificity) governs our legal framework. This principle, indicates that a trademark is protected only within the Nice class (or international classification) in which it was registered. The owner of a trademark cannot prevent another entity from registering and/or using a similar or identical mark in a different, unrelated class. For example, if a trademark is registered in class 05 for pharmaceutical products, the owner cannot stop a third party from registering the same or similar mark to advertise services in class 35.

Another important aspect to note is that, unlike other jurisdictions such as the United States or Puerto Rico, Peru applies the principle of prior tempore, potior iure (first in time, first in law). This means that ownership of a trademark is acquired through registration, not by mere use. Consequently, in the fast-paced and fleeting environment of social networks –where viral expressions and content emerge and disappear rapidly– the party that applies for registration first, meeting all legal requirements, will likely gain exclusive rights to that phrase as a trademark.

Returning to our main subject, we would like that, in our country, several television catchphrases have been registered as trademark. For example⁴: "LA FE ES LO MÁS LINDO DE LA VIDA" registered by soccer player Luis Alberto Guadalupe, better known as Luis

¹ SCHMITZ VACCARO, Christian (2012) "Distintividad y uso de las marcas comerciales". Revista Chilena de Derecho. Vol. 39 N°1, pp.9 - 31 [2012]. Web https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-34372012000100002&script=sci_arttext#n00

² ARANA COURREJOLLES, M. del C. (2011). "La No Distintividad Marcaria". Derecho & Sociedad, (36), 269-274. Web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/13233>.

³ SCHMITZ VACCARO, Christian (2012). Op. Cit. 9-31

⁴ Revisado en <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/962931-indecopi-conoce-cuatro-frases-y-expresiones-peruanas-populares-que-estran-registradas-como-marcas>

“Cuto” Guadalupe, to protect “education, training, entertainment services, sports, and cultural activities” in class 41; “QUE PASE EL DESGRACIADO”, registered by television host Laura Bozzo, to protect “services of show business artists, entertainment, variety show representation, ...”⁵ in class 41; and “¡ASU MARE!”, registered by actor Carlos Alcántara, to protect “education, training services, sports and cultural activities, videos, entertainment and recreational services, events and festivals related to culture, arts, education, sports, and leisure; organization of entertainment events; concerts, gastronomic activities; audio-visual production for cinema, TV, and radio programs; musical shows and competitions for entertainment purposes, ...”⁶ in Class 41.

Regarding Tik Tok and social media phrases, during 2024 and 2025, numerous signs or expressions have gained popularity. Entrepreneurs have started to apply for registrations and obtain trademark registrations for these terms, capitalizing on their trending status and the opportunity they present when a phrase becomes fashionable.

Let’s revisit the Peruvian “CAPIBARA” case. Although the original creator of this concept is unknown—referring to the person who created or popularized the animal as a trend—a Chinese citizen applied for the trademark in 2024 for goods in class 16⁷, and it was granted that same year. Does this mean that no one else can use the term? Not necessarily. As explained earlier, the trademark protects only the specific use within class 16 goods. Therefore, if the mark remains available, it could still be registered and used for goods in a different, unrelated class. As of the time of this article, six nullity proceedings concerning this trademark are pending. Once again, the principle of “first in time, first in law” applies.

It is also important to note that the term “CAPIBARA” appears in several trademarks in class 25 for clothing. As result, the word has become part of common usage in that category, meaning no one holds exclusive rights to it for apparel.

Additionally, marketing a garment featuring a capybara image does not automatically constitute the use of the “CAPIBARA” trademark. To establish valid use, the trademark “CAPIBARA” must appear on the product’s

label—specifically, on the label that provides care instructions like washing, ironing, and maintenance.

Another example is the trademark “CHOLLYWOOD PLANET,” registered in 2016 by a Peruvian citizen to cover “education; training; entertainment services, sports and cultural activities, production of television programs” in class 41. Although the term “CHOLLYWOOD” was popularized by television host Magaly Medina, the trademark owner registered “CHOLLYWOOD PLANET” in his name, since the mark was available in the registration system and no proof of prior use was required at that time.

Since then, various characters, content, and words have been created and shared on social networks—especially Tik Tok. It would be interesting to see how INDECOPI would decide on the distinctiveness of these trademarks, especially if some influencers want to register their iconic phrases such as “Forgive me everyone, I do not accept” from the Runaway Bride of Bagua, “Efe baby” (F BB) by influencer Jean Villón, “Tumba la fiesta” by influencer Valentino Palacios, among others. These phrases should be linked to specific classes and could potentially be used to distinguish certain goods or services.

Typically, phrases or signs like these are registered in classes such as 16 (general stationery), 25 (clothing), and 41 (entertainment services). However, the crux is not just selecting the appropriate class and goods or services—it’s also about genuinely intending to use the mark to distinguish those goods in the marketplace. Otherwise, there is a risk that a third party could attempt to register such a phrase or expression as a trademark.

In an environment where content is constantly changing and disappearing to make room for new information, timing is crucial for protecting—or losing—copyrightable elements through intellectual property rights. Additionally, it is important to have the expertise to differentiate between a meme and a marketable product.)))

⁵ (...) representación de espectáculos en vivo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; producción de espectáculos; montaje de programas de radio y televisión; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por radio y televisión.

⁶ (...) publicación y edición de libros; proyección de videos; servicios de biblioteca; publicación de textos que no sean publicitarios, publicaciones periódicas y de artículos de libros electrónicos en línea no descargables, alquiler de películas cinematográficas, exhibición de películas cinematográficas, alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos, estudios de cine, grabación y/o filmación en cintas de vídeo, montaje de cintas de vídeo.

⁷ Productos registrados: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctica; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta, lapiceros y lápices.



En el segundo trimestre del 2025 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Prohibir las llamadas de recordatorio de pago antes del vencimiento de deuda

La congresista Katy Ugarte, integrante del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha enviado el Proyecto de Ley n.º 11437/2024-CR que busca prohibir las llamadas de recordatorio de pago antes del vencimiento de la deuda, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, evitando prácticas abusivas y hostigadoras por parte de las empresas.

Esta propuesta incorpora el inciso i) del artículo 62 del Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley n.º 29571 para evitar métodos abusivos de cobranza al deudor o su garante a través de documentos que simulen ser notificaciones o escritos judiciales, así como también divulgar nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial por medios de comunicación, entre otros.

También se considera como prácticas abusivas realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20:00 horas y las 7:00 horas o los sábados, domingos y feriados.

<https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/11437>

Establecer tratamiento progresivo del pago del Impuesto a la Renta para empresas nuevas o que se formalicen

El parlamentario José Jerí de la bancada Somos Perú planteó el Proyecto de Ley n.º 11460/2024-CR que promueve la formalización y la reinversión de las empresas, a través de la aplicación de un tratamiento tributario especial y progresivo del pago del impuesto a la renta (IR) durante los primeros años de operación formal, aplicable a empresas que se formalicen o que hayan sido recientemente constituidas.

En tanto, no estarán sujetos aquellos negocios activos bajo cualquier régimen tributario vigente al momento de solicitar el beneficio, así como también aquellas que tengan vínculo a un grupo empresarial.

Dicha propuesta legislativa se dirige a empresas recién constituidas y también a quienes vayan a formalizarse.

<https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/11460>



In the second quarter of 2025, two bills stand out. Below, we provide a summary of both legislative initiatives.

Prohibit Payment Reminder Calls Before the Due Date of a Debt

Congresswoman Katy Ugarte, a member of the Teachers' Bloc of the Concertación Nacional caucus, has submitted Bill 11437/2024-CR, aimed at prohibiting payment reminder calls before the stated maturity date. The goal is to protect consumers rights by preventing abusive and harassing practices by companies.

This proposal considers item i) of Article 62 of the Consumer Protection and Defense Code (Law 29571), to prevent abusive collection methods such as sending debtors or guarantors documents that mimic legal notices or judicial writings, as well as disclosing lists of debtors and payment requirements without court order, through communication media, among other measures.

It also considers as abusive practices any visits or telephone calls made between 8:00 p.m. and 7:00 a.m. as well as on Saturdays, Sundays, and holidays.

<https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/202111437>

Implement a Progressive Income Tax System for Newly Established or Recently Registered Businesses

Congressman José Jerí, Somos Perú caucus, proposed Bill 11460/2024-CR, which promotes the formalization and reinvestment of companies, through the application of a special and progressive income tax system during the initial years of formal operation. This system would apply to existing informal businesses that transition into formal companies, as well as to newly incorporated businesses.

Actively operating businesses under any current tax system at the time of requesting the benefit, as well as businesses linked to a corporate group, will not be eligible.

This proposal is aimed at newly incorporated companies and also at those existing businesses that are transitioning into formal companies.

<https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/202111460>



ARMANDO RIVERA FRANCO

*Socio director de la sede de Piura
Managing partner, Piura office
arveraf@munizlaw.com*

El directorio como hito de madurez empresarial: ¿Cuándo dar el paso?

Toda empresa que busca consolidarse y crecer de manera sostenible llega, eventualmente, a un punto de inflexión: la necesidad de profesionalizar su gobierno corporativo. En ese proceso, la implementación de un directorio no solo representa una evolución natural, sino también una decisión estratégica con implicancias legales, operativas y reputacionales.

En sus primeras etapas, es común que el fundador concentre la toma de decisiones. No obstante, conforme la empresa crece y enfrenta desafíos más complejos – como la expansión a nuevos mercados, la incorporación de socios o la búsqueda de financiamiento– se vuelve imprescindible contar con una instancia colegiada de deliberación y control que trascienda la figura del gerente general o del accionista mayoritario. Es entonces cuando la creación de un directorio cobra especial relevancia.

En el Perú, la Ley General de Sociedades establece que el directorio es facultativo en la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y obligatorio en la Sociedad Anónima (S.A.) y en la Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.). Sin embargo, más allá de la exigencia normativa, existen sólidos argumentos jurídicos y prácticos para instaurarlo de manera voluntaria, incluso en etapas tempranas del desarrollo empresarial. En ese sentido, propongo cuatro momentos clave para implementar un directorio.

Existen ciertos hitos en el ciclo de vida de una empresa que sugieren la conveniencia –o incluso la necesidad– de contar con un directorio formal:

- Crecimiento sostenido y necesidad de estructura:
A medida que la empresa escala, se vuelve fundamental institucionalizar la toma de decisiones. El directorio aporta estructura, define políticas internas, fortalece el control corporativo y mitiga los riesgos derivados de decisiones unilaterales o informales.
- Atracción de inversionistas o financiamiento bancario:
Los inversionistas y entidades financieras no solo evalúan indicadores financieros, sino también la calidad del gobierno corporativo. Un directorio funcional y documentado –con actas, reglamentos y perfiles bien definidos– puede ser decisivo para facilitar el acceso a capital o crédito.
- Expansión acelerada o ingreso a nuevos mercados:
La entrada a nuevos mercados conlleva riesgos jurídicos, regulatorios y operativos. El directorio brinda un espacio idóneo para anticipar contingencias, revisar contratos y establecer políticas de cumplimiento (compliance), especialmente en sectores altamente regulados.
- Transición generacional en empresas familiares:
En este contexto, el directorio actúa como un mecanismo de equilibrio entre los intereses familiares y empresariales. Su existencia puede integrarse en protocolos familiares y acuerdos de accionistas, facilitando la continuidad del negocio bajo principios de gobernanza sólidos y previsibles.

Si bien en nuestro país, los empresarios no tienen cultura de trabajar con un directorio; sin embargo, contar con uno profesionalizado permite adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo tales como la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, la gestión eficiente de riesgos y la toma de decisiones colegiada. Estas prácticas no solo fortalecen la organización internamente, sino que también mejoran su posicionamiento ante clientes, reguladores e inversionistas.

Desde la práctica legal, implementar un directorio desde etapas tempranas contribuye significativamente a la toma de decisiones estratégicas, el control interno y el cumplimiento normativo. Asimismo, permite delimitar claramente las responsabilidades entre accionistas y administradores, reduciendo los riesgos legales. La inclusión de directores independientes eleva el estándar de diligencia, aporta objetividad y ayuda a prevenir conflictos de interés.

¿Cómo dar el paso? Adoptar un enfoque gradual suele ser lo más eficiente. Una alternativa inicial es constituir un directorio asesor (advisory board), sin funciones vinculantes desde el punto de vista legal, pero con un rol activo en la estrategia empresarial. Esto permite profesionalizar la gestión sin alterar de inmediato la estructura societaria.

Posteriormente, la empresa puede transitar hacia un directorio formal, incorporando disposiciones específicas en el estatuto social, definiendo su reglamento y estableciendo la frecuencia y contenido de sus sesiones. La incorporación de al menos un director independiente es altamente recomendable por razones de buen gobierno y equilibrio en la toma de decisiones.

A modo de conclusión, considero que instaurar un directorio no debe percibirse como una carga administrativa, sino como una herramienta clave para la sostenibilidad y la institucionalización de la empresa. Desde una perspectiva jurídica, es una decisión que refuerza la gobernanza, reduce riesgos y mejora la percepción de terceros. Para cualquier empresa con visión de largo plazo, el directorio representa una inversión estratégica en liderazgo, control y seguridad jurídica.)))

The Board of Directors as a milestone of corporate maturity: Is it time to take the next step?

Every company seeking consolidation and sustainable growth eventually reaches a turning point: the need to give its corporate governance a professional status. In this process, implementing a Board of Directors is not only natural evolution, but also a strategic decision with legal, operational and reputational consequences.

In the early stages, the founder typically centralizes decision-making. However, as the company grows and faces more complex challenges –such as expanding into new markets, bringing in partners or seeking financing– having a governing board for oversight and strategic deliberation becomes essential; the board goes beyond the role of the general manager or the majority shareholder. At this point, the creation of a Board of Directors becomes especially relevant.

In Peru, the General Corporations Law sets out that the Board of Directors is optional for Closed Stock Corporations (S.A.C., acronym in Spanish) and mandatory for Corporations (S.A., acronym in Spanish) and for Publicly Traded Corporations (S.A.A., acronym in Spanish). However, despite the legal requirements, there are solid legal and practical reasons to voluntarily implementing a board, even at early stages of business development. In this regard, I suggest four key moments to implement a Board of Directors.

There are certain milestones in the life cycle of a company that suggest the convenience –or even the need– of having a formal Board of Directors:

- Sustained growth and need for structure:
As the company scales, institutionalizing decision-making becomes essential. The Board provides structure, defines internal policies, strengthens corporate control and mitigates risks caused by unilateral or informal decisions.
- Attracts investors or bank financing:
Investors and financial institutions assess more than just financial indicators; they also assess the quality of corporate governance. A functional and documented Board of Directors –with well-defined minutes, bylaws and profiles– can be decisive for an easy access to capital or credit.
- Accelerated expansion or entry into new markets:
Entering new markets entails legal, regulatory and operational risks. The Board of Directors provides a suitable space to anticipate contingencies, review contracts and set out compliance policies, especially in highly regulated sectors.
- Generational transition in family businesses:
In this context, the Board of Directors acts as a balancing mechanism between family and business interests. It can be integrated into family protocols and shareholder agreements, making business continuity easier under strong and predictable governance principles.

In our country, although businessmen do not have a culture of working with a Board of Directors, having a professionalized Board allows adopting good corporate governance practices such as transparency in management, accountability, efficient risk management and collaborative decision-making. These practices not only strengthen the organization internally but also enhance its positioning before customers, regulators and investors.

From the legal practice, implementing a Board early in a company contributes significantly to strategic decision-making, internal control and regulatory compliance. It also allows to clearly delimit responsibilities between shareholders and administrators, thus reducing legal risks. Including independent directors raises the diligence standard, provides objectivity and helps prevent conflicts of interest.

How to take this step? Adopting a gradual approach is usually the most effective way. An initial alternative is to set up an advisory board without binding functions from a legal standpoint, but with an active role in business strategy. This allows companies to professionalize management without immediately modifying their corporate structure.

Subsequently, the company can transition to a formal Board of Directors by incorporating specific provisions in the bylaws, defining its regulations and establishing the frequency and content of its meetings. The incorporation of at least one independent director is highly recommended to ensure good governance and balanced decision-making.

In conclusion, I believe that setting up a Board of Directors should not be seen as an administrative burden, but rather as a key tool for the sustainability and institutionalization of the company. From a legal perspective, it is a decision that strengthens governance, reduces risks and enhances the perception of third parties. For any company with a long-term vision, the Board of Directors represents a strategic investment in leadership, control and legal security. »

ESTABLECEN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL PARA DETERMINADOS SUJETOS

Mediante la Resolución de Superintendencia n.º 000168-2025/SUNAT, publicada el 28 de mayo de 2025, se estableció el plazo para determinados sujetos obligados no comprendidos en las Resoluciones de Superintendencia n.º 185-2019/SUNAT y n.º 000041-2022/SUNAT presenten la declaración del beneficiario final.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

Establecer el plazo para que determinados sujetos obligados presenten la declaración jurada informativa sobre sus beneficiarios finales con la finalidad de continuar con su implementación.

¿A quiénes les resulta aplicable la norma?

- a) Las personas jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, que no se encuentren comprendidas en el párrafo 5.2 del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia n.º 185-2019/SUNAT ni en el literal a) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia n.º 000041-2022/SUNAT.
- b) Los entes jurídicos constituidos en el país e inscritos en el RUC desde el 1.10.2024 hasta el 30.11.2026.
- c) Las personas jurídicas domiciliadas en el país y los entes jurídicos constituidos en el país que se inscriban en el RUC u obtengan el número de RUC con posterioridad al 30.11.2026.

¿De qué manera los afecta?

Se establece el plazo para la presentación de la declaración de los sujetos obligados conforme a lo siguiente:

- a) Las personas jurídicas domiciliadas presentan la declaración:
 - i) Hasta las fechas de vencimiento previstas en el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones del periodo que les corresponda en función de sus ingresos netos conforme al siguiente cuadro:

Tramo	Ingresos netos	Plazo de presentación: período
1	Más de 100 UIT	Octubre de 2025
2	Más de 50 UIT hasta 100 UIT	Diciembre de 2025
3	Más de 25 UIT hasta 50 UIT	Julio de 2026
4	Más de 10 UIT hasta 25 UIT	Setiembre de 2026
5	Hasta 10 UIT	Noviembre de 2026

- ii) Hasta las fechas de vencimiento previstas en el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones del periodo de noviembre de 2026 en los siguientes supuestos:
 - ii.1) si no se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2024 y las declaraciones mensuales de los periodos de enero a diciembre de 2024; ii.2) si no se encuentran comprendidas en alguno de los tramos del cuadro anterior; ii.3) Si han obtenido su número de RUC hasta el 31.12.2024 y no han realizado la activación hasta dicha fecha; y, ii.4) si se inscriben en el RUC u obtienen el número de RUC y lo activan, de ser necesaria la activación, desde el 1.1.2025 al 30.11.2026.

- b) Los entes jurídicos constituidos en el país e inscritos en el RUC, que no se encuentren con baja de inscripción a la fecha que les corresponda presentar la declaración, deben presentarla hasta las fechas de vencimiento previstas en el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones del periodo noviembre de 2026.
- c) Las personas jurídicas domiciliadas en el país y los entes jurídicos constituidos en el país que se inscriban en el RUC u obtengan el número de RUC con posterioridad al 30.II.2026, deben presentar la declaración hasta las fechas de vencimiento previstas en el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones del periodo en que se inscriban o activen su RUC, de ser necesaria la activación.

La declaración debe contener la información del beneficiario final al último día calendario del periodo a que se refieren los literales anteriores. Adicionalmente, se establece que, para el cálculo de los ingresos netos, se debe considerar lo siguiente:

Ejercicio gravable anterior al de la presentación	Se considera como ingresos netos el mayor valor que resulte de las siguientes operaciones:
Régimen general o Régimen Mype tributario	i. La suma de las casillas 461, 473, 475, 476 y 477 del Formulario Virtual N.º 710: Renta Anual Simplificado - Tercera Categoría o del Formulario Virtual N.º 710: Renta Anual - Completo - Tercera Categoría e ITF. ii. La suma de las casillas 100, 105,112, 127 y 160, menos los montos consignados en las casillas 102, 126 y 162 de los formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los PDT N.º 621 IGV - Renta mensual. iii. La suma de los montos de la casilla 301 de los formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los PDT N.º 621 IGV - Renta mensual.
Régimen especial del impuesto a la renta y en el régimen general de dicho impuesto o en el régimen MYPE tributario	i. La suma de las casillas 461, 475, 476 y 477 del Formulario Virtual N.º 710: Renta Anual Simplificado - Tercera Categoría o del Formulario Virtual N.º 710: Renta Anual - Completo - Tercera Categoría e ITF más la de los montos consignados en la casilla 301 del (de los) formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o del (de los) PDT N.º 621 IGV - Renta mensual de las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta, correspondientes al (los) periodo(s) en el(los) que estuvo en el régimen especial del impuesto a la renta. ii. La suma de las casillas 100, 105, 112, 127 y 160, menos los montos consignados en las casillas 102, 126 y 162 de los formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los PDT N.º 621 IGV - Renta mensual. iii. La suma de los montos de la casilla 301 de los formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los PDT N.º 621 IGV - Renta mensual que correspondan a las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta y a los pagos a cuenta del impuesto a la renta del (los) periodo(s) en el(los) que estuvo en el régimen especial del impuesto a la renta y en el régimen general de dicho impuesto o en el régimen MYPE tributario, según corresponda.

Asimismo, se precisa que, a fin de establecer si la persona jurídica se encuentra comprendida en alguno de los tramos del cuadro, se debe considerar la declaración jurada anual del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable 2024 y las declaraciones mensuales de los periodos enero a diciembre de 2024, que se presenten hasta el 31.I0.2025 (incluyendo rectificatorias que surtan efecto hasta dicha fecha).

Finalmente, se precisa que las personas jurídicas no domiciliadas en el país y los entes jurídicos constituidos en el extranjero deben presentar la declaración hasta la fecha de vencimiento que la Sunat establezca mediante resolución de superintendencia.

¿Cuándo entra en vigor?

La Resolución de Superintendencia N° 000168-2025/SUNAT en comentario entró en vigor el 29 de mayo de 2025.

Puede acceder al texto completo de dicha norma en el siguiente enlace:
[Resolución de Superintendencia n.º 000168-2025/SUNAT](#)

ESTABLISH DEADLINE FOR CERTAIN REPORTING PARTIES TO SUBMIT THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER’S DECLARATION

Through Superintendence Resolution 000168-2025/SUNAT, published on May 28, 2025, a deadline was established for certain taxpayers not covered by Superintendence Resolutions 185-2019/SUNAT and 000041-2022/SUNAT to submit the Ultimate Beneficial Owner’s Declaration.

What is the purpose of this regulation?

To establish the deadline for certain reporting parties to submit an informational sworn declaration regarding their beneficial owners, in order to continue its implementation.

Who is subject to this regulation?

- a) Legal entities having their registered office in Peru, as established in Article 7 of the Income Tax Law, that are not included in item 5.2 of Article 5 of Superintendence Resolution 185-2019/SUNAT or in item a) of Article 2 of Superintendence Resolution 000041-2022/SUNAT.
- b) Legal entities incorporated in Peru and registered in the Single Taxpayers Registration System (R.U.C.) between October 1, 2024 and November 30, 2026.
- c) Legal entities having their registered office in Peru and legal entities incorporated in Peru and registered in the R.U.C. or obtaining a R.U.C. registration number after November 30, 2026.

How does this affect them?

The deadline for reporting parties to submit this declaration is established as follows:

- a) Legal entities having their registered office in Peru shall submit the declaration:
 - i) By the due dates specified in the schedule for the fulfillment of the obligations corresponding to their net income for the applicable period, as per the following table:

Section	Net income	Submission Deadline: Period
1	Over 100 Taxation Units	October 2025
2	From 50 Taxation Units and to 100 Taxation Units	December 2025
3	From 25 Taxation Units to 50 Taxation Units	July 2026
4	From 10 Taxation Units to 25 Taxation Units	September 2026
5	Up to 10 Taxation Units	November 2026

- ii) Up to the due dates specified in the schedule for complying with the obligations for the period ending in November 2026, in the following cases: ii.1) if they are not required to file the annual income tax return for the 2024 fiscal year nor the monthly returns for the periods from January to December 2024; ii.2) if they do not fall within any of the brackets outlined in the table above; ii.3) if they obtained their R.U.C. number by December 31, 2024, and have not activated it by that date; and, ii.4) if they register for the R.U.C., or obtain the R.U.C. number and activate it-if activation is necessary- between January 1, 2025, and November 30, 2026.
- b) Legal entities incorporated in the Peru and registered in the R.U.C., which have not been deregistered by the date on which they are required to submit their declaration, must do so by the deadlines specified in the schedule for complying with the obligations for the period ending in November 2026.

c) Legal entities having their registered office in Peru and legal entities incorporated in Peru that register in the R.U.C. or obtain the R.U.C. number after November 30, 2026, shall submit their declarations by the deadlines specified in the schedule for complying with the obligations for the period in which they register or activate their R.U.C., if activation is necessary.

The declaration shall contain the information of the ultimate beneficial owner as of the last calendar day of the period referred to in the preceding paragraphs. In addition, for the calculation of net income, the following shall be taken into account:

Previous Fiscal Year:	The net income is the highest value resulting from the following calculation:
General or SME Tax System	i. The sum of boxes 461, 473, 475, 476, and 477 of Virtual Form No. 710: Simplified Annual Income - Third Bracket or Virtual Form No. 710: Annual Income - Complete - Third Bracket and ITF (Transaction Tax).
	ii. The sum of boxes 100, 105, 112, 127, and 160, minus the amounts entered in boxes 102, 126, and 162 of the forms Declara Fácil 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income or, if applicable, PDT No. 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income.
	iii. The sum of the amounts in box 301 of the forms Declara Fácil 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income or, if applicable, of PDT 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income.
Special Income Tax System, General Income Tax System, or SME Tax System.	i. The sum of boxes 461, 475, 476, and 477 of Virtual Form No. 710: Simplified Annual Income - Third Bracket or Virtual Form No. 710: Annual Income - Complete - Third Category and ITF plus the amounts shown in box 301 of the form(s) Declara Fácil 621 IGV - Monthly Income or PDT No. 621 IGV - Monthly Income of the monthly installments of the special income tax system, corresponding to the period(s) in which it was in the special income tax system.
	ii. The sum of boxes 100, 105, 112, 127 and 160, minus the amounts entered in boxes 102, 126, and 162 of the forms Declara Fácil 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income or, if applicable, of the PDT No. 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income.
	iii. The sum of the amounts in box 301 of the forms Declara Fácil 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income or, if applicable, of PDT No. 621 Sales Tax (IGV) - Monthly Income corresponding to the monthly payments during the period(s) in which the company was in the special income tax system, as well as the payments made on account of income tax during those periods, whether in the special system, in the general system, or under the SME System, as applicable.

Additionally, to determine whether a legal entity falls within any of the brackets in the table, the annual income tax return for the 2024 fiscal year and the monthly tax returns for the periods from January to December 2024 -filed up to October 31, 2025, including any rectifications that take effect by that date-shall be taken into account.

Finally, non-domiciled legal entities and entities incorporated abroad shall file their declaration by the deadline established by SUNAT through a Superintendency Resolution.

When does it come into force?

The Superintendence Resolution No. 000168-2025/SUNAT under analysis entered into force on May 29, 2025.

To access the full text of the Resolution, click on the following link:
[Superintendency Resolution 000168-2025/SUNAT](#)

Desayuno ejecutivo

El Estudio Muñiz realizó dos desayunos ejecutivos exclusivo para clientes. El primero se realizó en abril y tuvo la participación como expositores de Ricardo Herrera, socio principal y director del área de Derecho Laboral y Seguridad Laboral, quien habló sobre las nuevas tendencias jurisprudenciales laborales; Luis García, socio senior del área de Derecho Tributario, quien nos comentó sobre la coyuntura tributaria; e Ian Galarza, socio senior del área de Derecho Penal, quien expuso sobre la responsabilidad del director o gerente general y cómo prevenirla. En el segundo, realizado en junio, además de la presencia de Ricardo Herrera y Luis García, nos acompañó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, quien habló sobre las perspectivas económicas a un año de un nuevo gobierno.)))

Estudio Muñiz held two exclusive executive breakfasts for clients. The first one took place in April, and featured: Ricardo Herrera, Senior Partner and Head of the Labor Law and Occupational Safety Area, who discussed emerging trends in labor jurisprudence. Luis García, Senior Partner of the Tax Law Area, who provided insights on the current tax situation. Ian Galarza, Senior Partner of the Criminal Law Area, who talked about the liability of directors and CEOs and strategies for its prevention. The second, held in June, was attended by Ricardo Herrera and Luis García, and featured David Tuesta, former Minister of Economy and Finance, who shared his insights on the economic outlook one year ahead of a new government.)))



Webinars y eventos exclusivos

Nuestro estudio realizó diferentes webinars y eventos exclusivos para clientes, donde se abordaron temas como la garantía inmobiliaria, protección al consumidor, publicidad y datos personales, así como comercio exterior y nuevas tendencias legales enfocadas en la sostenibilidad.)))

Our firm organized several webinars and exclusive events for clients, covering topics such as real estate guarantees, consumer protection, advertising, and data privacy, as well as international trade and emerging legal trends focused on sustainability.)))

71st International PRAC Conference

El Estudio Muñiz, junto con el Pacific Rim Advisory Council (PRAC), organizó la 71st International PRAC Conference, un encuentro internacional que reunió a destacados abogados y líderes de firmas legales, en su mayor parte de países de la cuenca del Pacífico. Durante el evento se trataron diferentes temas sumamente importantes para la profesión legal. Participó como invitado David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, quien presentó al Perú como la puerta de ingreso a América Latina para los países del APEC.)))

Estudio Muñiz, in collaboration with the Pacific Rim Advisory Council (PRAC), organized the 71st International PRAC Conference, an international gathering that brought together prominent lawyers and leaders of law firms, most of whom are from Pacific Rim countries. During the event, a variety of important topics relevant to the legal profession were discussed. David Tuesta, former Minister of Economy and Finance, participated as a guest speaker, presenting Peru as the gateway to Latin America for APEC countries.)))



GC Powerlist 2025

Se realizó el 19 de junio la presentación del GC Powerlist Peru 2025, donde se destacó el trabajo de los gerentes legales más influyentes del mercado peruano. Este evento fue organizado por The Legal 500 y nuestro estudio participó como auspiciador. *On June 19, the GC Powerlist Peru 2025 was presented, highlighting the work of the most influential in-house legal managers in the Peruvian market. This event was organized by The Legal 500, with our firm participating as a sponsor.*



Meeting de practicantes

El Comité de Innova – Practicantes y el Estudio Muñiz organizaron un meeting de practicantes, en el que también participaron los socios de la firma, para incentivar la camaradería y hacer hincapié en la cultura, principios y valores que priman en nuestra institución. *The Innova – Practicantes Committee (Innovate Intern) and Estudio Muñiz organized an interns' meeting, which was also attended by partners of the firm. The purpose was to foster camaraderie and to emphasize the culture, principles, and values that are fundamental to our organization.*

Leaders League 2025

Estudio Muñiz es considerado como una de las firmas más destacadas del mercado legal peruano en Fashion law, Patent litigation, Enforcement & anti-counterfeiting actions, IP litigation, Life Sciences: regulatory, Patent prosecution, Plant varieties protection, Trademark prosecution, Advertising law & marketing, Data protection, Telecommunications law, por Leaders League 2025. *Estudio Muñiz is recognized as one of the leading law firms in the Peruvian legal market in areas such as Fashion Law, Patent Litigation, Enforcement & Anti-Counterfeiting Actions, IP Litigation, Life Sciences, Regulatory issues, Patent Prosecution, Plant Varieties Protection, Trademark Prosecution, Advertising Law & Marketing, Data Protection, and Telecommunications Law, according to Leaders League 2025.*



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca